

MENSAJE DEL GOBERNADOR
DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
HONORABLE RAFAEL HERNANDEZ COLON
EN CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE
EL PROCESO PLEBISCITARIO Y LOS COSTOS FISCALES
Y ECONOMICOS DE LA ESTADIDAD

13 DE JULIO DE 1989

En el día de hoy, hemos presenciado la ponencia del funcionario clave del Tesoro norteamericano, que va allí, políticamente a defender la posición del Presidente Bush a favor de la estadidad, evadiendo el tema de las repercusiones económicas y contributivas negativas de la estadidad. La imprecisión de su testimonio es deliberada, ya que el Tesoro conoce muy bien la 936 y la cláusula de uniformidad y no quisieron abiertamente abordar el tema y aceptar lo inevitable: que la "cómoda" transición que propuso el PNP no es viable económica ni fiscalmente.

Con toda la politización que ha permeado la presentación ante el Congreso del Poder Ejecutivo, el PNP no logró un endoso de los pilares básicos de su propuesta: una eliminación paulatina durante los próximos 25 años de los beneficios de la 936; que el Gobierno federal asuma el pago de la deuda pública de Puerto Rico que asciende a 12 mil millones de dólares; que el pago inmediato de contribuciones federales se atempere por la devolución a Puerto Rico de dichos fondos durante un número de años. Tampoco lograron respaldo al Omnibus Bill para mantener los privilegios que

tiene actualmente la industria del café en Puerto Rico. Tampoco han logrado respaldo a su posición de que los ciudadanos americanos, bajo la estadidad, obtengan los mismos beneficios de los programas de bienestar social que disfrutan sus conciudadanos en los Estados Unidos. Y está bien claro, que el PNP no tiene apoyo, ni en el Congreso ni en el Ejecutivo, para garantizar el español como el idioma oficial de Puerto Rico.

Tampoco han logrado respaldo para su petición de que Puerto Rico goce del derecho sobre las 200 millas ya que, según el Departamento de Justicia, este beneficio no lo goza ningún estado de la nación.

La ponencia del representante del Departamento del Tesoro reconoce inequívocamente la existencia de un descuadre presupuestario bajo el supuesto de la estadidad. La incorporación de Puerto Rico como un estado federado a la nación americana significaría este año, a base de los estimados conservadores de Gideons, una pérdida de ingresos

para el Gobierno de Puerto Rico de \$1,050 millones, que tendrían que ser repuestos por contribuciones adicionales locales o que tendrían que ser recortados del presupuesto operacional del gobierno.

Para comprender la magnitud de esta cifra deben considerar que esto representa un 37.5% del total de gasto de funcionamiento del gobierno de Puerto Rico en este año fiscal o un 53.6% del total de la nómina durante este año fiscal.

En otras palabras, la estadidad confrontaría al pueblo de Puerto Rico con la difícilísima decisión, según el propio representante del Tesoro, de imponer contribuciones adicionales por más de mil millones de dólares o con la eliminación de aproximadamente 100,000 plazas de los servidores públicos del Gobierno de Puerto Rico, y además con una reducción en los correspondientes servicios esenciales tales como, educación, salud, policía y carreteras.

Y esta crisis fiscal que confrontaríamos, ni siquiera toma en consideración el efecto devastador que tendría sobre la actividad económica en Puerto Rico la eliminación de los beneficios que gozamos bajo la sección 936 que el mismo Secretario Auxiliar Gideon admite ocasionaría la pérdida de empresas 936 ubicadas en Puerto Rico. Cito las propias palabras de Gideon "una eliminación gradual de los beneficios de la 936 causarían el descalabro económico en Puerto Rico".

La politización de la ponencia del Tesoro, haciendo malabares para mantenerse impreciso y no tener que dismantelar la alegada bonanza económica de la estadidad, trae a colación que bajo el ELA el Congreso tiene el poder de enmendar o modificar la 936. Esta aseveración, que es el premio de consolación que le da Tesoro a los estadistas, es una posición que se conoce en Puerto Rico, que hemos confrontado en el pasado y que hemos podido sobreponernos y salir airosos.

Hoy los puertorriqueños inequívocamente han confrontado los costos fiscales y económicos de la estadidad en una ponencia de un funcionario de la Administración Bush que aunque quiso no decir mucho, reveló con elocuente silencio la imposibilidad e irrealidad de la propuesta de la estadidad.

FUNDACION

BIBLIOTECA

RHC

